

## Entrevista a Francisco Giraldo

Economista de la Universidad Externado de Colombia. Docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.

— Revista Divergencia (RD): ¿Cuál ha sido el papel que han jugado las baccrim y los grupos paramilitares frente a las multinacionales y la extracción de recursos?

— Francisco Giraldo (FG): Hay algunos casos de multinacionales, como las mineras AngloGold Ashanti, Gran Colombia Gold y una carbonera que tiene una pésima fama en el mundo, que es la Drummond, de haber recurrido a organizaciones de grupos armados ilegales para golpear las organizaciones de resistencia que normalmente aparecen en las áreas de influencia de los sitios de explotación donde operan. El caso más evidente es el de esta carbonera en la zona de La Jagua de Ibirico, pero quizá el más extremo y conocido ha sido el de la Chiquita Brands, que es el nombre que tiene hoy en día la United Fruit Company, compañía norteamericana bananera que protagonizó la matanza de noviembre y diciembre de 1928 en la zona bananera de Ciénaga, Santa Marta, que en buena parte es sobre lo que escribe Gabriel García Márquez en



Dr. Francisco Giraldo  
Fotografía: Camila Garzón

su obra *Cien años de soledad*. Es evidente que hay cierta tendencia a que algunas compañías extranjeras, sobre todo las mineras y las extractoras de recursos naturales, recurran a este mecanismo para golpear a las organizaciones sindicalistas populares.

— RD: ¿Cómo afecta esto a los grupos sindicalistas?

— FG: En los años setenta, ochenta y principios de los noventa, los sindicatos en Urabá se vieron bastante afectados por la organización paramilitar organizada por la Chiquita Brands, que causó gran conflicto y violencia en la zona, e incluso creó dinámicas de conflicto entre grupos armados

como el EPL, las FARC, los paramilitares y las bacrim. Y, sin embargo, el sindicalismo común, como organización social, política y civil de reivindicaciones sociales, siempre terminaba siendo, sin duda alguna, la víctima directa más afectada.

— RD: ¿Qué tipo de garantías hay o debería haber para los trabajadores de las compañías mineras?

— FG: Por ejemplo, en el Cerrejón podemos observar que han surgido ciertas situaciones que podrían considerarse complicadas, pero, mal que bien, en este caso el problema de asesinato o persecución de sindicalistas no ha sido tan fuerte. Ha habido menciones sobre la gente de Kiko Gómez y su socio, Marcos Figueroa — que fue capturado en Brasil—, por haberle hecho favores en La Guajira, pero la gente del Cerrejón ha sido sana en medio de todo, ya que hay garantías por el respeto a la vida de los sindicalistas en general.

— RD: En este tipo de eventos mencionados anteriormente, ¿interviene la ONU o alguna entidad encargada de la protección de los derechos humanos?

— FG: Sí. Usualmente, cuando esos asesinatos ocurren, las ONG defensoras de derechos humanos comienzan a presentar las respectivas demandas. Colombia ha sido condenada más de

una vez por las demandas causadas por situaciones de esa índole, ya que el Estado no ha garantizado la vida de personas que han denunciado estar amenazadas, y tampoco ha cumplido con su obligación de protegerlas y mantenerlas a salvo.

— RD: ¿Podría la minería de esmeraldas en Muzo, en el occidente de Boyacá, considerarse como un ejemplo de la maldición de los recursos naturales?

— FG: Yo creo que el caso de Muzo es un excelente ejemplo, pues es una región que en los últimos 500 años ha generado unos volúmenes de riqueza enormes, sin embargo, hoy en día la situación de vida de la población es particularmente miserable debido a las condiciones técnicas de explotación de las esmeraldas y a la dificultad que hay de controlarlas, pero sobre todo, por la falta de voluntad del Estado para establecer mecanismos de regulación y control a la captura de rentas por parte de los empresarios. El Estado ha facilitado el hecho de que se dé la explotación y que esta no deje ningún tipo de beneficio para la población. Allí no hay vías, no hay educación ni salud, no obstante, recientemente algunos pocos empleados de estas empresas mineras han podido disfrutar del beneficio de contar con una seguridad social, la cual antes era totalmente nula. Este es un logro producto del

buen trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, que ha obligado a algunas minas a afiliarse a sus empleados a la seguridad social. Sin embargo, es el caso típico de una zona minera que produce mucha riqueza, pero en la que se encuentra miseria.

— RD: ¿Cuál fue el control que el Estado ejerció cuando era propietario de las minas y tenía poder sobre estas?

— FG: En 1954, por una reorganización en las funciones del Banco de la República, dicha entidad terminó asumiendo el control de la explotación de las minas. El Estado tenía que buscar rentas que le generaran de alguna manera riqueza para pignorarlas y así garantizar los créditos que necesitaba. Fue así como el Estado le adjudicó al banco central el monopolio de la sal, al igual que el de la minería de esmeraldas, lo que le permitió beneficiarse enormemente debido a que en los años sesenta se produjo una bonanza de la explotación de esmeraldas. Pero esta situación poco a poco condujo a que los funcionarios del Banco de la República se vieran implicados en la asociación con empresarios ilegales y con las bandas criminales responsables de la violencia en la región, generándose así todo tipo de corrupción, robo de las piedras y el ejercicio de un control

desmedido y muy agresivo contra la población.

Ese suceso fue el pequeño lunar en la historia del Banco de la República, que se ha caracterizado por ser una institución muy transparente; sin embargo, en ese caso puntual, como representante del Estado, tuvo una participación nefasta en el manejo de esta situación a modo de intento de pacificación y reivindicación por parte del Estado. Al final del Gobierno de Misael Pastrana y al inicio del de Alfonso López se inició el proceso para otorgar la soberanía de las minas a empresarios particulares para que el banco, a su vez, saliera de la sombra. Pero el problema radicó en que varios de esos empresarios formaban parte de las bandas criminales que operaban en la región.

— RD: ¿Cuál fue la importancia que tuvo el Estado en el control de la zona y de las relaciones sociales en el periodo de privatización posterior a 1974?

— FG: Después de que el Banco de la República entregó las minas a particulares, se perfeccionó una figura que ya se había creado, que consistía en formar una reserva minera enorme que incluía algunos municipios, como Pauna, Maripí, Borbur, Muzo y Otanche, ubicados en la cuenca del

río Minero, decretada como reserva minera, conformada por alrededor de 80 000 hectáreas.

Los empresarios comenzaron a concesionar la explotación de algunos lugares específicos, como las minas Las Pavas, El Mango, Coscuez y Peñas Blancas, la cual nunca fue concesionada, pero por la que se desató en buena parte la guerra en 1966, llamada la primera guerra de las esmeraldas.

Era tanta la presión y la actividad ilegal que se ejercía en esa región, que el Estado nunca fue capaz de concesionar esa mina y entregarla a una empresa privada específica. Pero, independientemente de eso, en los otros municipios los empresarios fueron dirigidos primero por Gilberto Molina y después por Víctor Carranza. Este último personaje ejerció un poder político, social y armado sobre toda la población, manipuló las actividades y la política de la zona, inclusive después 1988, cuando se dio la primera elección popular de alcaldes, puesto que, por lo menos en la primera etapa, la gran mayoría de los alcaldes de estos municipios eran elegidos por los empresarios mineros más poderosos e influyentes de la zona. Un ejemplo de

esto es el caso de Quípama, un municipio creado, en buena parte, por la influencia de Gilberto Molina en los años ochenta, y cuyos primeros tres alcaldes eran ingenieros que trabajaban en las minas, por consiguiente, eran empleados de Molina. Así, Molina y Carranza ejercieron el control sobre absolutamente todo.

— RD: Con respecto a la guerra en Muzo y el proceso de paz, ¿qué características particulares tuvo el proceso de paz de occidente?

— FG: Con la muerte de Molina y con la de Rodríguez Gacha posteriormente, responsable de ordenar la muerte de Molina, se generó un ambiente muy particular, pues la Iglesia intentó los primeros acercamientos a los empresarios. Adicionalmente, una vez muerto Rodríguez Gacha, los empresarios de los otros pueblos que se habían ido armando contra Molina y Carranza —los de Maripí, Pauna y Otanche— empezaron a ceder en el enfrentamiento que tenían e iniciaron un proceso muy particular, pues fue relativamente exitoso, pero en el cual la participación del Estado fue totalmente marginal, de hecho, el Estado no firmó el acta del proceso de paz.

ACUERDO REGIONAL DE PAZ EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ

---

OBJETIVO GENERAL:

Alcanzar para la región del Occidente de Boyacá, la pacificación, el respeto integral de las personas, en su vida, honra y bienes y obtener, en los Municipios que componen la Cuenca del Río Minero y los demás de Occidente, el desarrollo político, económico y social: Tununguá y Municipios vecinos, Briceño, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, La Victoria, Quípama, Muzo, Maripí, Copér, Buenavista, Chiquinquirá, Caldas y Simijaca; Inspecciones de Santa Bárbara, Nariño, San Martín y Peñas Blancas, y Vereda de Cozcuez la Mina.

Se inició un proceso en el que la Iglesia católica jugó un papel muy importante y aprovechó un poco que los empresarios de esa época eran muy conservadores en cuestiones de política y también muy religiosos. Monseñor Raúl Jarro y monseñor Héctor Gutiérrez fueron los intermediarios entre las partes, y con su participación lograron la firma de un acta que no tiene mayores detalles, pero que logró reducir notoriamente los índices de violencia en la región.

Eso implicó que los empresarios, por medio de ese acuerdo, empezaran a presionar y a sacar a las personas que siguieran delinquirando.

— RD: Leyes de finales de los años noventa. ¿Qué cambios generó la nue-

va legislación con respecto a los mineros informales y a los empresarios?

— FG: A finales de los años noventa se inició un proceso de tecnificación de la explotación que hizo que las condiciones de la zona cambiaran significativamente, dado que la explotación originalmente se hacía a cielo abierto, lo cual implicaba que los escombros y el tambre que no servían fueran desechados y terminaran en las quebradas y en las fuentes hídricas. Debido a esto, la legislación colombiana empezó a prohibir este tipo de explotación e indicó que esta tenía que realizarse por medio de túneles, con el objetivo de reducir notablemente los escombros y la contaminación.

— RD: ¿Qué vendría para Muzo si hubiera mayor intervención estatal?

— FG: Hay cosas que han cambiado bastante. Hay municipios alejados, como Coper, famoso por el cacao, no solo por la cantidad producida allí, sino por su calidad. En buena parte de Quípama, un pueblo minero que era muy violento, se ha generado un proceso de concienciación con respecto a la actividad minera, que claramente es un negocio eventual y muy efímero. Allí sus habitantes han preferido dedicarse al campo, labor en la que han encontrado mucho apoyo por parte del Estado, que ha ayudado a cambiar la perspectiva de vida de las personas, por eso han preferido trabajar en actividades económicas que quizá no sean muy rentables, pero que tienen mayor sostenibilidad, como la agricultura. Por otro lado, después del proceso de paz, buena parte de los jóvenes han preferido salir con la poca educación que tienen a buscar vida por fuera de las minas. Un fenómeno que es muy fuerte en Muzo, sobre todo en la gente mayor, es que piensan que aún mantienen el

estigma que en algún momento caracterizó a los esmeralderos de esa región, de ser violentos y peligrosos. La gente siente mucha carga emocional por la secuela de su pasado violento.

La influencia que tenían las empresas sobre las alcaldías en estos municipios ha disminuido, aunque sigue habiendo una corrupción rampante y hay una tensión fuerte porque, desde hace cuatro o cinco años para acá, al hacerse evidente que Víctor Carranza se estaba envejeciendo, que posiblemente se estaba debilitando, empezaron a presentarse enfrentamientos por el control de unos túneles en medio de las minas de La Pita y Cuna, que, a su vez, conllevaron los atentados a Carranza y muertes periódicas de esmeralderos en Bogotá, Tunja, Chiquinquirá y Muzo. Sin embargo, la violencia en estas zonas conflictivas del país a causa de la avaricia por el poder y el dinero se ha reducido considerablemente y ha convertido esa crueldad y miedo solo en historias del pasado, nada parecido a lo que se vive y respira hoy en día en los diferentes pueblos.